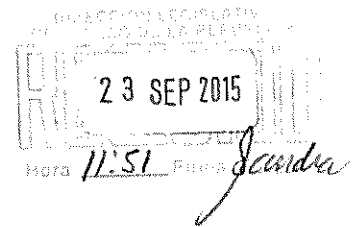




00000011

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*



CLPC-OGR/ml/044-2015


22 de septiembre de 2015

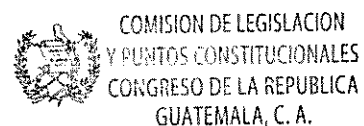
**Licenciada
Ana Isabel Antillón
Directora Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho**

Licenciada Antillón:

De manera atenta me dirijo a usted y de conformidad con lo regulado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, adjunto el **DICTAMEN DESFAVORABLE**, emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el día 24 de febrero de 2015, a la **Iniciativa de Ley número 4568**, que dispone aprobar **Reformas al Decreto No. 72-2001** del Congreso de la República, **Ley de Colegiación Profesional Obligatoria**.

Sin otro particular.


**Diputado Oliverio García Rodas
Presidente**





00000012

Dictamen 02-2015

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

DICTAMEN No. 02-2015**INICIATIVA No. 4568****REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 72-2001 DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, LEY DE COLEGIACIÓN PROFESIONAL OBLIGATORIA****HONORABLE PLENO:**

Con fecha veintisiete de agosto del año dos mil trece, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió para su estudio y dictamen, la iniciativa de ley identificada con el número de registro **4568** de la Dirección Legislativa, que sugiere aprobar Reformas al Decreto Número 72-2001 del Congreso de la República, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, misma que fue recibida el veintinueve de agosto de 2013 en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Esta iniciativa es presentada por el Diputado Juan Carlos Rivera Estévez.

ANTECEDENTES

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 90 que "La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio." (párrafo primero); y que "Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de la que fueren egresados sus miembros." (párrafo segundo).

La Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, está contenida en el decreto número 72-2001 del Congreso de la República, y contempla en su capítulo V un apartado correspondiente para SANCIONES Y REHABILITACIONES, que comprende los artículos 26 a 31, ambos inclusive, de aquel texto legal.

El artículo 26 de este cuerpo normativo efectivamente establece las clases de sanciones a imponer a los colegiados por quejas ante el Tribunal de Honor, así: sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, (que no



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

conlleven inhabilitación para el ejercicio de la profesión) -anotación nuestra-
suspensión temporal en el ejercicio de su profesión y suspensión definitiva. **(que
por su naturaleza inhabilitan temporal o definitivamente para el ejercicio de
la profesión).** (esta anotación es nuestra).

Asimismo, que la suspensión temporal en el ejercicio de la profesión no podrá ser menor de seis meses ni mayor de dos años, y que la suspensión definitiva conlleva la pérdida de calidad de colegiado activo.

Además, enfáticamente señala que "El procedimiento a seguir por el Tribunal de Honor se debe fijar por cada colegio en sus respectivos estatutos, debiéndose respetar en todo caso el derecho constitucional de defensa y debido proceso"; y sugiere que de preferencia se debe unificar el procedimiento en todos los colegios profesionales.

En el artículo 27, este normativo contempla, además, que las sanciones acordadas por el Tribunal de Honor **son definitivas y únicamente apelables ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, de conformidad con el Reglamento de Apelaciones de dicho órgano.** (el resaltado es nuestro).

Los artículos 28, 29, y 30 se refieren a la gradación de las sanciones, publicidad de las resoluciones, y obligación de los colegios profesionales de denunciar ante la autoridad correspondiente la usurpación de calidad, a quien se arrogare título académico o ejerciere actos que competen a profesionales universitarios, sin tener título o habilitación especial, o, quien poseyendo título profesional, esté inhabilitado temporal o definitivamente y en consecuencia desautorizado para el desempeño de su profesión y la ejerciere.

El artículo 31, establece que: "Cuando autoridad competente del Organismo Judicial sancionare a un profesional con pena que conlleve **inhabilitación, sea ésta temporal o definitiva** (el resaltado es nuestro), lo debe comunicar al colegio respectivo, para su anotación y registro correspondiente; y contempla además, que: **En igual forma se debe proceder cuando se levante la suspensión o se haya cumplido el término de ésta.** (El resaltado es nuestro), de donde se deduce que en este caso, si se contempla la rehabilitación, en los términos del artículo 31 que se analiza, pero cuando lo autorice autoridad competente del Organismo Judicial.



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Fuera de esta excepción, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, no contempla rehabilitación de las sanciones impuestas por el Tribunal de Honor de los Colegios Profesionales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, decreto número 72-2001 del Congreso de la República de Guatemala, y el artículo 27 de esta misma ley, que establece que las sanciones acordadas por el Tribunal de Honor **son definitivas y únicamente apelables ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, de conformidad con el Reglamento de Apelaciones de dicho órgano.** (el resaltado es nuestro).

CONTENIDO DE LA INICIATIVA DE LEY

- A. La iniciativa de ley identificada con el número **4568**, objeto de este estudio, contempla introducir reformas a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto Número 72-2001 del Congreso de la República, mediante la adición de los artículos 31 bis, 31 ter, y 31 quáter, cuyo texto sugiere respectivamente:

El artículo 31 bis, propuesto, contempla la rehabilitación de los colegiados que el Tribunal de Honor hubiere sancionado con amonestación privada, amonestación pública, o sanción pecuniaria, cuando se haya ejecutado y cumplido la sanción firme, por el transcurso del tiempo, en los plazos que señala, siempre que durante los mismos el profesional no hubiere sido objeto de una nueva sanción.

El artículo 32 ter, propuesto, establece los requisitos que, en su opinión, deberá llenar la solicitud de rehabilitación que se dirigirá ante el Tribunal de Honor.

En cuanto que, el artículo 31 quáter propuesto establece el trámite que debería darse a la solicitud de rehabilitación hasta la resolución que, en caso ésta se declare con lugar, deberá dictarse para inscribir la rehabilitación del colegiado en los registros del Tribunal **y cancelar el registro de la sanción rehabilitada.** (el resaltado es nuestro).

- B. Como sustento de esta iniciativa de ley, en su exposición de motivos, el ponente cita, como ejemplo, que la Ley de Comisiones de Postulación requiere que para integrar aquellas comisiones se presente constancia de no



00000015

Dictamen 02-2015

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

haber sido sancionado por el Colegio Profesional respectivo y establece los mismos requisitos para el perfil de los profesionales del colegio de que se trate, que aspiren a ser electos por estas comisiones, y particulariza que las acciones impuestas por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, debidamente ejecutoriadas, no son objeto de rehabilitación por el transcurso del tiempo, situación que hace que los efectos del registro de estas sanciones sean ad infinitum, con lo cual se niega a los miembros de este Colegio Profesional su participación en las distintas elecciones que tienen su origen en la Constitución Política de la República, por toda la vida profesional del agremiado, siendo claramente desigual que el ordenamiento jurídico guatemalteco establezca tiempo de prescripción de los antecedentes penales para establecer la reincidencia y la habitualidad, de las personas penalmente condenadas, mientras que para los sancionados por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, no exista ningún tipo de rehabilitación por el transcurso del tiempo, convirtiéndose los efectos de estas sanciones en eternos.

Invoca como fundamento legal, el principio de igualdad humana como principio fundamental consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y el artículo 22 del mismo texto constitucional, que establece que los antecedentes penales y o policiales no son causa para que a las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantizan, salvo cuando se limiten por ley o en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma.

Además, cita: "estableciéndose que el artículo 34 del Código Penal norma la prescripción de los antecedentes penales para determinar la reincidencia y la habitualidad, regulando que transcurridos diez años entre la perpetración de uno y otro delito, no se tomará en cuenta la condena anterior, sin que se compute dentro de ese término, el tiempo en que el delincuente permanezca privado de libertad por detención preventiva o por la pena".

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

La Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, decreto número 72-2001 del Congreso de la República, contempla en el apartado correspondiente para SANCIONES Y REHABILITACIONES, capítulo V, (artículo 26) las clases de



*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

sanciones a imponer a los colegiados por quejas ante el Tribunal de Honor, así: sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal en el ejercicio de su profesión y suspensión definitiva. Además, que la suspensión temporal en el ejercicio de la profesión no podrá ser menor de seis meses ni mayor de dos años, y que la suspensión definitiva conlleva la pérdida de calidad de colegiado activo.

Por la denominación y naturaleza de aquellas sanciones puede colegirse que las hay de tracto único (sanción pecuniaria, amonestación privada y amonestación pública, que por serlo así se cumplen en un solo acto, **y no conllevan inhabilitación para el ejercicio de la profesión**) ^{-anotación nuestra-} y de tracto sucesivo (suspensión temporal en el ejercicio de su profesión y suspensión definitiva) que se cumplen por o durante el curso del tiempo, **que por su naturaleza inhabilitan temporal o definitivamente para el ejercicio de la profesión.** ^{(esta anotación es nuestra).}

Todas aquellas sanciones, acordadas por el Tribunal de Honor, son definitivas y únicamente apelables ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, de conformidad con el Reglamento de Apelaciones de dicho órgano. (Artículo 27).

La Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, decreto número 72-2001 del Congreso de la República no contempla la rehabilitación de aquellas sanciones (sanción pecuniaria, amonestación privada y amonestación pública, que por serlo así se cumplen en un solo acto, **y no conllevan inhabilitación para el ejercicio de la profesión**) ^{-anotación nuestra-}, y si, en cambio, para la suspensión temporal o definitiva **que por su naturaleza si inhabilitan temporal o definitivamente para el ejercicio de la profesión**, cuando se hubiere cumplido la misma o así lo resuelva autoridad competente del Organismo Judicial. (Artículo 31).

Con respecto a la propuesta que contiene la iniciativa de ley objeto de estudio, para la rehabilitación de los colegiados que el Tribunal de Honor hubiere sancionado, **cuando se haya ejecutado y cumplido la sanción firme,** ^(el resaltado es nuestro), por el curso de los plazos que contempla, cuando se trate de sanción pecuniaria, sanción de amonestación privada y sanción de amonestación pública, si fue impugnada y posteriormente ratificada por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, ejecutoriada y cumplida, esta Comisión estima que, por el carácter de definitividad de aquellas sanciones, **que no conllevan**



00000017

Dictamen 02-2015

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

inhabilitación para el ejercicio de la profesión no es procedente la rehabilitación del colegiado objeto de la sanción, si no ha sido inhabilitado, toda vez que ello implicaría retrotraer el procedimiento cumplido para la imposición de la misma hasta dejarla sin efecto, lo que daría probablemente lugar a otras implicaciones legales.

Sí es cierto, como lo afirma el representante Rivera Estévez, que el artículo 22 de la Constitución Política de la República establece que los antecedentes penales y policiales no son causa para que a las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantizan, salvo cuando se limiten por ley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma, pero a simple lectura del mismo puede observarse que éste no indica que deban cancelarse los registros de aquellos antecedentes, sino que advierte claramente que los mismos, no son causa para que a las personas se les restrinja en el ejercicio de sus derechos garantizados por la Constitución Política de la República.

DICTAMEN

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, con base en las consideraciones citadas y el análisis del fundamento legal inserto, emite **DICTAMEN DESFAVORABLE** a la iniciativa de ley identificada con el número de registro **4568** de la Dirección Legislativa del Congreso de la República, por ser un proyecto de Decreto inconveniente, inviable e inconstitucional.

Dado en la sala de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de Guatemala, en la ciudad de Guatemala el día veinticuatro de febrero del año dos mil quince.


Oliverio García Rodas
Presidente

Carlos Enrique López Girón
Vicepresidente


Alicia Dolores Beltrán López
Secretaria



00000018

Dictamen 02-2015

*Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*



Luis Pedro Álvarez Morales

Manuel de Jesús Barquín Durán



José Alberto Gándara Torrebiarte


Carlos Valentín Gramajo Maldonado



Amílcar de Jesús Pop Ac



Emmanuel Seidner Aguado



Jorge Mario Barrios Falla



Walter Rolando Félix López

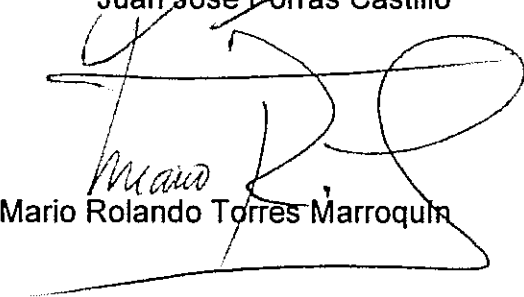


Álvaro González Ricci

Pedro Muadi Menéndez



Juan José Porras Castillo



Mario Rolando Torres Marroquín